



Iconos. Revista de Ciencias Sociales

ISSN: 1390-1249

revistaiconos@flacso.org.ec

Facultad Latinoamericana de Ciencias

Sociales

Ecuador

Seoane, José

La debacle neoliberal Protesta social y crisis política en Argentina

Iconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 13, marzo, 2002, pp. 21-30

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Quito, Ecuador

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50901303>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

La debacle neoliberal

Protesta social y crisis política en Argentina

José Seoane*

Imágenes del final¹

Al caer la tarde del jueves 20 de diciembre, el presidente De la Rúa presentaba su renuncia. Así concluía, precipitadamente, el breve gobierno de la Alianza² que había ganado holgadamente las elecciones presidenciales en Argentina en octubre de 1999. Mientras el helicóptero oficial transportaba al ya expresidente, en los alrededores de la Casa de Gobierno y a lo largo de todo el centro de la ciudad de Buenos Aires, las fuerzas policiales intentaban disolver, bajo el peso de una violenta represión, la incansable manifestación popular que había ocupado y disputado la simbólica Plaza de Mayo desde la noche del día anterior.

Estas imágenes retrataban el fracaso de la coalición política oficial que había por demás defraudado las expectativas populares que acompañaron su triunfo dos años atrás. Tras el compromiso electoral de trabajo, educa-



ción y justicia³, el significativo incremento de la desocupación, la asfixia presupuestaria de la educación pública, los intentos de arancelamiento de los estudios universitarios y la concupiscencia con los jueces federales designados bajo la gestión menemista, habían señalado ya el fácil olvido de los pactos ciudadanos del que parecen hacer gala las élites políticas contemporáneas. Los cacerolazos y protestas de finales de diciembre, protagonizadas en buena medida por los propios secto-

* Sociólogo. Coordinador del programa Observatorio Social de América Latina (OSAL) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Email: seoane@clacso.edu.ar

1 Este artículo preparado para *ICONOS* se basa en una versión publicada en la revista *Diálogo*, febrero de 2002, de FLACSO-Guatemala. Agradezco especialmente a Ivana Brighenti su colaboración en la edición del texto, así como a Atilio Boron y Clara Algranati por sus comentarios.

2 Nombre de la coalición electoral conformada por la Unión Cívica Radical y el FREPASO (Frente País Solidario).

3 Este fue el lema principal de la campaña electoral realizada por la Alianza en 1999.

res sociales que habían apoyado la coalición gobernante, reponían en las calles la esencia vital de la democracia, vilipendiada y corroída bajo la aplicación de las políticas neoliberales.

Finalizaba una gestión que, bajo las atentas “recomendaciones” del FMI y la banca acreedora, sólo había profundizado una y otra vez el ajuste fiscal y, consecuentemente, acelerado brutalmente el largo ciclo recesivo -que lleva más de cuatro años- y el proceso de pauperización social que signa casi sin discontinuidades la política económica argentina desde mediados de la década de los setenta.

La renuncia forzada del expresidente De La Rúa se incorporaba así a la lista -nada breve, por cierto, si consideramos los casos de Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela en la última década- de gobernantes neoliberales latinoamericanos que debieron abandonar apresuradamente el poder al calor del repudio y la movilización social.

Pero la caída del gobierno y la crisis política desencadenada a partir de allí -que, entre otras cuestiones, se expresó en el devenir de cinco presidentes en menos de 15 días- reflejaba también el colapso del régimen forjado a principios de la década de los noventa: la llamada “convertibilidad”, que fuera la cristalización histórica particular de un ciclo de más largo aliento que hunde sus raíces casi tres décadas atrás con el inicio de las políticas de corte neoliberal en Argentina. Las consecuencias sociales de dichas políticas quedan por demás graficadas ante el hecho que mientras en 1975, sobre 22 millones de habitantes, la población que vivía por debajo de la línea de pobreza se contaba en 2 millones, y hoy entre una población de 37 millones son más de 14 millones de ciudadanos los condenados a ser pobres⁴, de los cuales casi un tercio (un poco más de 4,5 millones de personas) son indigentes. Profundizada radicalmente en los últimos años, la pauperización social y el de-

sempleo de masas que la acompaña -vale señalar que las últimas cifras oficiales dan cuenta que más del 22% de la población económicamente activa se encuentra desempleada- retratan las catastróficas consecuencias sociales que supuso la aplicación de las políticas neoliberales.

Asimismo, la crisis de la “Argentina de la convertibilidad” proyecta sus sombras en el plano internacional. Forjada por el ex presidente Menem y el ministro Cavallo a principios de los noventa, prolongada bajo la gestión de De la Rúa, y enseñada como el ejemplo del camino a seguir por parte de los impulsores del “libre mercado”, la economía argentina señala -con su colapso actual-, con toda la intensidad de un caso testigo, la profunda crisis que afronta la llamada “globalización neoliberal”.

Fisonomía del neoliberalismo

Impuesto a sangre y fuego a partir de 1976 con la dictadura militar, el montaje de la estrategia neoliberal en Argentina supuso la constitución de un nuevo régimen socioeconómico, caracterizado por un patrón regresivo de distribución del ingreso y la riqueza, que significó un furioso proceso de concentración del capital y expropiación de bienes, ingresos y derechos de amplias franjas sociales, así como también de los bienes públicos y los recursos naturales.

Bajo inspiración de la ortodoxia económica, basada en la liberalización financiera y comercial, dicho régimen significó la instalación de un modelo signado por la valorización financiera y la transferencia de recursos al exterior. El endeudamiento externo del gran capital local -luego “estatizado” bajo la breve gestión de Domingo Cavallo al frente del Banco Central en 1982-, ligado a la especulación financiera y la fuga de capitales, y el endeudamiento estatal que acompañó a éste para proveer las divisas necesarias al ciclo especulativo, hicieron del crecimiento de la deuda externa un componente esencial del ré-

⁴ Según los datos de la medición de octubre de 2001 provista por la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos).

gimen neoliberal. Por otra parte, el predominio de la inversión financiera -en detrimento de la productiva- combinado con la apertura comercial llevaron al extremo la destrucción del aparato productivo; se consumó la desindustrialización de la economía con la consecuente expansión del desempleo y la sistemática reducción de los salarios.

La implementación en 1991 del régimen de la convertibilidad significó, más allá de sus efectos sobre la contención de la espiral inflacionaria, la profundización radical del rumbo neoliberal: se acentuó la apertura comercial y se abrió paso a la privatización radical de los activos públicos. En este esquema, las privatizaciones permitieron tanto al gran capital local como al internacional apropiarse, a valores irrisorios, de parcelas de la actividad económica en condiciones de por lo menos cuasi-monopolio y de alta rentabilidad, obteniendo nuevas alternativas de valorización sobre la base de trastocar la otrora vigencia de determinados derechos de carácter público en un objeto más del proceso de acumulación del capital⁵. La asociación en una nueva “comunidad de negocios” -de los grandes empresarios locales con la banca internacional y las empresas transnacionales- en la gestión de las empresas públicas privatizadas constituyó tanto un punto de consenso entre el poder económico como un permanente sostenedor de la gestión del gobierno del expresidente Menem. El otorgamiento de estos sectores de alta rentabilidad al capital más concentrado se vinculó a un nuevo ciclo de endeudamiento externo y fuga de capitales que caracterizó la década de los noventa y marcó, una vez más, el carácter prebendario y rentístico del régimen económico en Argentina. Es fácil percibir que el desarrollo de este proceso no sólo profundizó la crisis social y la injusticia en términos distributivos sino que, a su vez, llevó al extremo las condiciones de fragilidad fiscal y de deterioro de la balanza externa.

La dependencia estructural del régimen iniciado a mediados de la década de los seten-

ta al flujo de capitales externos -sea bajo la forma de endeudamiento, de capital especulativo o de inversión- significa que cuando el acceso al mercado internacional de capitales se interrumpe, el mencionado orden es puesto en crisis y afronta momentos de colapso. Así ocurrió en 1982 (crisis de la deuda externa), en 1989 (quiebra fiscal e hiperinflación), en 1995 (efecto Tequila) y vuelve a darse desde mediados de 1998 como efecto de la crisis mundial⁶.

En este sentido, la crisis argentina, en su particular complejidad, expresa también a nivel nacional los efectos de los temblores financieros que atravesaron la “globalización neoliberal” a partir de finales de 1997 con el derrumbe de las economías asiáticas, y que prolongaron sus efectos a lo largo de 1998 en Rusia y Brasil para alcanzar al centro de las grandes potencias -particularmente Estados Unidos en 2001- bajo la forma de un recesión económica que parece hoy instalarse a nivel internacional. Sin embargo, a diferencia de las crisis anteriores, la particularidad de la presente nos remite a tres cuestiones o procesos que intentaremos analizar a continuación.

Los cacerolazos y protestas reponían en las calles la esencia vital de la democracia, vilipendiada y corroída bajo la aplicación de las políticas neoliberales.

Parece ser el fin del disciplinamiento social consolidado por el terror represivo de la dictadura y el “terror económico” de la hiperinflación y el desempleo.



El resurgir de la movilización social

Los cacerolazos y movilizaciones encarnados por los sectores urbanos que signaron las jor-

5 Ver, entre otros, Basualdo 2000 y Lozano 2001.

6 Ver Lozano 2001.

nadas de diciembre, particularmente las capas medias y amplios grupos juveniles en la ciudad de Buenos Aires, coronaron un largo proceso de incremento de la protesta social y fortalecimiento de los movimientos populares forjado a lo largo de 2001. Vale mencionar que el número de protestas impulsadas por diferentes movimientos y organizaciones a lo largo del año que acaba de concluir, se incrementó en más de un 50% respecto del año anterior⁷.

Este crecimiento de la protesta se manifestó también en la ampliación de la territorialidad social de la misma, que abarcó desde los trabajadores con empleo -particularmente del sector público- a los desocupados, los estudiantes, los sectores medios, los comerciantes y los pequeños productores agrícolas. Una protesta que además se amplió en su densidad, en el avance organizativo que algunos de estos procesos supusieron -especialmente en los sectores de trabajadores desocupados y urbanos-, en el desarrollo de nuevas formas de acción colectiva y entramados organizativos y en la importancia de los conflictos. En su amplia configuración e intensidad, la protesta social reflejaba tanto la profundidad del impacto de la recesión económica y las políticas de ajuste como los procesos de rearticulación de los lazos sociales bajo la constitución y fortalecimiento de los movimientos sociales.

Así, las movilizaciones de diciembre portaban como herencia, experiencia y antecedente a las intensas luchas sociales desencadenadas en marzo y julio del mismo año frente a los renovados intentos de recorte del gasto fiscal impulsados por el gobierno. El primero, condensado entre los días 16 y 21 de marzo, se originó en el rechazo al feroz paquete de

medidas de recorte del gasto público anunciado por el ministro de economía Ricardo López Murphy. Si bien se concretaron sólo una parte de las medidas anunciadas, la masiva movilización de diversos sectores contribuyó a precipitar la renuncia del nuevo ministro. El segundo, iniciado a mediados del mes de julio y que se extiende hasta octubre, surge en respuesta al anuncio gubernamental del plan de déficit cero impulsado por Domingo Cavallo, sucesor de Murphy en el ministerio de economía. Dicho plan suponía -como su nombre ya lo anuncia- la eliminación inmediata del déficit fiscal a través de la reducción del gasto -con excepción de los servicios de la deuda externa- al nivel de la recaudación tributaria. En los hechos, la aplicación de esta ley supuso una reducción del 13% en los salarios del sector público (que incluyó también a las jubilaciones), así como cesantías masivas, desmantelamiento de áreas públicas y el recorte del presupuesto universitario -lo que condenaba a varias casas de estudio a su virtual paralización-. La prolongación de dicho ajuste a las administraciones provinciales significó, además de las reducciones salariales y los despidos, el pago de parte de los salarios con bonos o directamente el no pago, a lo que se agregaba la deuda del incentivo docente, un plus salarial obtenido en los inicios del gobierno aliancista. Frente a esta política que mostraba ya el colapso del régimen económico conocido como "convertibilidad", un amplio arco de movimientos y organizaciones sociales (trabajadores desocupados, empleados del sector público, maestros, docentes universitarios, estudiantes, etc.) protagonizaron un intenso y prolongado período de protestas que tuvo sus jornadas nacionales más significativas en los cortes de ruta progresivos a lo largo del mes de agosto (impulsados por la asamblea nacional de trabajadores desocupados⁸ y, entre otros, por la CTA⁹) y se exten-

7 Esta evaluación resulta de los datos proporcionados por el Observatorio Social de América Latina (OSAL). El análisis de dichos resultados y de la relevancia de los conflictos realizado por el OSAL desde enero de 2000 puede consultarse en Seoane, Taddei y Algranati 2001 y en Seoane y Taddei 2001. Las versiones, a texto completo, de los últimos números de la revista del OSAL se encuentran en las páginas web: <http://www.clacso.org> ó <http://osal.clacso.org>

8 El 24 de julio de 2001 se realiza la I Asamblea Nacional de organizaciones populares, territoriales y de desocupados -o asamblea nacional "piquetera"- que reúne, por primera vez, a la mayoría del movimiento de trabajadores desocupados.

dió, en numerosas provincias del interior del país, bajo la forma de nutridas movilizaciones multisectoriales¹⁰.

Este ciclo de movilizaciones, huelgas, cortes de ruta y cacerolazos que recorrió durante 2001 y que se expresó distintivamente sobre el fin del año nos remite a tres cuestiones que vale la pena resaltar. En primer lugar, parece marcar el final del disciplinamiento social consolidado bajo el ejercicio o amenaza del terror represivo de la pasada dictadura que, recuperado bajo la forma del “terror económico”, instaló socialmente la serie hiperinflacionaria y el desempleo de masas en la década de los noventa. El proceso de reconstitución y surgimiento de nuevos colectivos sociales a lo largo de los últimos años -asociados a nuevas formas organizativas y de protesta, como por ejemplo las puebladas, los cortes de ruta o piquetes y ahora los cacerolazos- señala una serie de hechos que, en cierta medida, culmina recuperando para la movilización social su capacidad de incidencia efectiva en la crisis con la irrupción social en la escena del poder en diciembre pasado. Señala así, por lo menos, la vigencia de un límite social a los intentos de resolución de la situación actual. El bullicio de las cacerolas y los piquetes resuenan en los oídos de la élite política y económica.

En segundo lugar, en tanto las políticas aplicadas durante estas décadas, y particularmente durante el último año, contaron con la participación o beneplácito de la mayoría del *establishment* político, el crecimiento de los movimientos de protesta se consolidó en una cada vez más manifiesta autonomía de los partidos mayoritarios y, en su experiencia, fue

forjando una crítica al conjunto del régimen político, lo cual estuvo claramente de manifiesto en las protestas de diciembre, dando inicio a un complejo y germinal proceso de democracia callejera, asamblearia y participativa y de reapropiación social de lo público-político.

Finalmente, en su vitalidad y sus formas, las protestas argentinas parecen rememorar otras experiencias de rebeliones sociales recientes en Latinoamérica como el levantamiento indígena de Ecuador en enero de 2000 o la llamada “Guerra del Agua” en Cochabamba-Bolivia en abril de ese mismo año contra la privatización de la empresa proveedora de agua, señalando así también el carácter regional de los procesos en curso¹¹.

La creciente ilegitimidad del régimen político

Como lo señala Noam Chomsky¹², la liberalización del capital, característica de las contrarreformas neoliberales, conduce a la instalación de un “parlamento virtual” que, tras el control cotidiano de los flujos especulativos, obtiene un “poder de veto y decisión” sobre las políticas de gobierno, restringiendo de facto la democracia. Así también, Atilio Boron¹³ ha señalado la profunda contradicción vigente entre la democracia, entendida como efectivo gobierno del pueblo, y el neoliberalismo.

La experiencia argentina reciente resulta un trágico y claro ejemplo de estas consideraciones. La aplicación de las políticas neoliberales durante la década menemista de los noventa supuso una particular concentración del poder en el Ejecutivo -a través de los decretos presidenciales-, de control y subordinación de la justicia -ampliación de la Corte Suprema, reemplazo de los Jueces Federales- y de generalización de la corrupción, que lejos

9 Central de los Trabajadores Argentinos, cuyos orígenes se remontan a inicios de la década de los noventa y que, a mediados de dicha década, se constituyera como central sindical alternativa a la Confederación General del Trabajo (CGT) y encabezara la oposición sindical al gobierno menemista.

10 Ver Iñigo Carrera y Cotarelo 2001, Dinerstein 2001, Scribano y Schuster 2001, Spaltenberg y Maceira 2001, Rodríguez 2001, Seoane, Viú, Rodríguez y Santucho 2001, Spaltenberg, Seoane, Rodríguez y Santucho 2000.

11 Ver AA.VV. 2000a y AA.VV. 2000b.

12 Pueden consultarse, entre otros, Chomsky 2002.

13 Ver Boron 2000.

Existe una contradicción entre democracia y neoliberalismo: la liberalización del capital conduce a la instalación de un “parlamento virtual” que, tras el control de los flujos especulativos, obtiene un “poder de veto y decisión” sobre las políticas de gobierno, restringiendo de facto la democracia.



Sin embargo, como ya lo señalamos, el gobierno de la Alianza, lejos de escuchar las razones democráticas de su apoyo electoral, fue marcando una continuidad cada vez más acentuada con el gobierno menemista anterior, lo que en los hechos significó una sucesión de conflictos políticos a su interior y un progresivo desgranamiento y distanciamiento respecto del Poder Ejecutivo de buena parte de las estructuras políticas de los dos partidos que conformaban la coalición oficial.

De cara a la sociedad, la creciente ilegitimidad política que supo ganarse el gobierno en su corta gestión, y también la amplia mayoría del *establishment*, se reflejó en varios hechos: a) los resultados de las elecciones de octubre

de ser un “cuerpo extraño” al modelo económico cumplió un rol fundamental en la conformación del consenso activo y pasivo que la mayoría de las élites dirigenciales de los diferentes estamentos otorgaron a su implementación¹⁴. Las victorias electorales obtenidas por el presidente Menem -abonadas por estos procesos y por el control inflacionario, la ficticia bonanza económica y la extensión del crédito de los primeros años- comenzaron a opacarse en la segunda mitad de la década de los noventa con la profundización de la crisis económica. Así, el retroceso electoral del partido gobernante (el partido justicialista) en las elecciones parlamentarias y provinciales de 1997, particularmente con el revés en la provincia de Buenos Aires, y la derrota estrepitosa en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1999 marcaban, en términos de la voluntad popular, la exigencia social de un cambio de rumbo.

de 2001 con el fabuloso derrumbe electoral de la alianza gobernante; b) la pérdida de votos del partido justicialista -aunque le permitió conquistar la primera minoría en la Cámara de Diputados y, en ese sentido, asegurarse un relativo control del Parlamento, cuestión que jugará un rol decisivo en la transición abierta en diciembre-; c) el vertiginoso crecimiento del voto nulo o blanco que alcanzó a casi el 22%, constituyéndose en la tercera fuerza a nivel nacional; d) el caudal electoral obtenido por nuevas coaliciones electorales críticas a la política gubernamental, en buena parte conformadas por desprendimientos y rupturas de la alianza gobernante, y e) el importante incremento de la izquierda política.

Por tanto, el cuestionamiento al conjunto de los poderes del Estado (el Poder Ejecutivo, el Parlamento y la Corte Suprema) que caracterizó las protestas de diciembre expresó -con mayor intensidad en las calles- el reclamo de un *demos* que, sobreponiendo su orfandad de representación, demandaba una reforma radical del régimen político capaz de hacer efectivo el gobierno del pueblo.

La disputa de los poderes económicos

Como ya lo señalamos, el ciclo de la convertibilidad aseguró un nuevo proceso de enriquecimiento para los poderes económicos dominantes, cifrados particularmente en su participación en las privatizaciones de las empresas públicas. La entrega de estos activos públicos significó el traspaso de áreas quasi-monopolísticas en condiciones regulatorias altamente favorables -aumento tarifario, dolarización de las facturas, indexación bianual por la inflación norteamericana, etc.-. Por esta vía, se garantizó un nuevo ciclo de transferencia de ingresos y riquezas al poder económico más concentrado, a la que debe sumarse la permanente caída del costo laboral y los subsidios al sector privado.

Sin embargo, el relativo cierre del acceso al crédito internacional, las devaluaciones com-

14 Ver, entre otros, Basualdo 2001.

petitivas encaradas por otros países de la región -particularmente Brasil- y la creciente magnitud de la recesión mundial, marcaron el agotamiento de este círculo “virtuoso”, en términos del capital más concentrado, de la convertibilidad.

Esta crisis se expresó en la creciente disputa y tensión al interior del bloque dominante entre las fracciones financieras y de los servicios públicos privatizados -que sobre la segunda mitad de los noventa pasaron a manos de las trasnacionales-, que pugnaban por la dolarización, y la fracción acaudillada por los llamados “grandes grupos locales”, que defendían la devaluación, fundamentalmente exportadores y principales protagonistas de la fuga de capitales¹⁵. Esta ruptura del consenso del bloque dominante a partir de 1999, y su disputa sobre el rumbo económico, atravesó al conjunto del *establishment* político y se expresó ante cada medida gubernamental. Sin embargo, más allá de estas diferencias y de los intentos de volcar a su favor a otros sectores sociales, ambos grupos coincidían, y siguen coincidiendo, en sostener el patrón regresivo de distribución del ingreso.

En este contexto, bajo los reiterados “golpes de mercado”, que se viabilizaron particularmente bajo la escalada del riesgo-país y la fuga de depósitos, y con la adopción de sucesivos ajustes fiscales, el gobierno de De la Rúa privilegió la preeminencia de los sectores financieros, los acreedores externos y los consejos del FMI. La permanencia de dicha puja jugó también un papel importante en la crisis de diciembre y en sus intentos de resolución -posteriores y actuales-. En este sentido, y tras la devaluación del peso y los anuncios de desdolarizar la economía, el tránsito del gobierno de De la Rúa al de Eduardo Duhalde -actual presidente- puede interpretarse en términos de las diferencias entre los poderes económicos como la creciente preeminencia alcanzada por los grandes grupos locales, los exportadores.

Las jornadas de diciembre

Durante las últimas semanas de diciembre, los procesos antes descritos se combinaron e intensificaron para sellar la suerte del oficialismo, cuestionar al régimen político y poner en debate las salidas a la crisis de la convertibilidad. Su detonante particular fue la sanción de una serie de medidas resueltas por el ministro Cavallo, bautizadas luego como “el corralito”, y que significaron un virtual congelamiento de los depósitos bancarios, afectando tanto a los depósitos a plazo fijo como al cobro de salarios que habían sido obligados, por medidas anteriores del propio ministro, a realizarse en buena parte a través de las entidades bancarias. El impacto de estas políticas rápidamente hizo oír su voz. El miércoles 12 de diciembre múltiples protestas y cortes de ruta se realizaban en todo el país, y se escuchaban los primeros “cacerolazos” y “bochinazos”. Al día siguiente, todas las centrales sindicales convocaban a un paro nacional contra la política económica que recogió un altísimo acatamiento -uno de los mayores de la década¹⁶.

Ese mismo día aparecen los primeros saqueos y reclamos de comida en el interior del país. Éstos se prolongan en una ola que en los días 18 y 19 se multiplica en todo el cono urbano bonaerense y en buena parte de las ciudades del país. Bajo estas acciones, que rememoran aquellas de 1989, los sectores más empobrecidos de las populosas barriadas de las principales ciudades del país reaparecían en la arena del conflicto -redefiniendo las experiencias de cortes de ruta que habían caracterizado al movimiento de trabajadores desocupados en los meses y años anteriores-.

Por la noche del 19 de diciembre, el ex presidente De la Rúa anunciaba por cadena nacional el dictado del estado de sitio, medida consensuada con los gobernadores justicialistas. Sobre el final de su discurso, en un acto de abierta desobediencia civil, los vecinos de Buenos Aires y de numerosas ciudades del

país comenzaban a hacer sonar sus cacerolas para reunirse luego en las esquinas e iniciar una larga marcha hacia los lugares símbolos del poder político: la residencia presidencial de Olivos, la casa del ministro Cavallo, el Congreso Nacional y la Plaza de Mayo. Cuando las primeras columnas de vecinos - donde se destacaban las mujeres, los jóvenes y los niños- llegaban a la Plaza de Mayo repiqueteando las cacerolas, ya era pasada la medianoche. Muy singularmente, la represión que se descargó sobre los primeros manifestantes que se concentraban en la plaza no hizo desistir al conjunto. Durante buena parte de la noche, en una jornada que se reinicia el jueves desde la mañana, se prolonga una verdadera batalla callejera por su ocupación; batalla que se extiende paulatinamente a todo el centro de la ciudad. Las imágenes de estos enfrentamientos, la distintiva presencia juvenil y el encarnizamiento policial hacen recordar a las jornadas de Génova de julio de 2001 contra la Cumbre del G8. La brutal represión cobra cientos de heridos y detenidos y, por lo menos, 6 muertos bajo las balas policiales¹⁷. Hacia el fin del día 20, el presidente y el gobierno en su conjunto renuncian. La tan inesperada como intensa protesta y movilización ciudadana -de aquellos que fueron principales apoyos electorales del triunfo de la Alianza en 1999- y la respuesta represiva que los acogió marcan, así, el fin del gobierno de De la Rúa. Señalan también la profundidad de la crisis de hegemonía que cuestiona hoy al modelo neoliberal en Argentina.

Tras la asunción de un brevísimo mandato como presidente de Rodríguez Saá, las disputas de poder al interior del Partido Justicialista (a la que no fue ajena el conjunto del *establishment* político) y la pujía entre las distintas fracciones del poder económico abrieron



el espacio para que el bullicio de las cacerolas y las movilizaciones marcaran el tiempo de la crisis política.

Una resolución aún pendiente

Por la noche del martes 1 de enero de 2002 la Asamblea Legislativa, convocada por segunda vez en menos de quince días y con el apoyo de la mayoría del *establishment* político, coronó como nuevo presidente al candidato justicialista Eduardo Duhalde. Por vía del acuerdo parlamentario llegaba así al Poder Ejecutivo aquel que fuera ampliamente derrotado en las elecciones presidenciales de 1999. En términos partidarios su elección significaba el encumbramiento del aparato justicialista de la provincia de Buenos Aires con el apoyo de los sectores alfonsinistas de la UCR. En términos sociales representaba el arribo de los sectores políticos más próximos a los intereses de los grupos económicos locales -que presentamos anteriormente-, lo que permite entender su confrontación discursiva inicial frente al po-

17 Los 6 muertos (algunas informaciones elevan el número a 7) son las víctimas fatales reconocidas, resultado de la represión policial en el centro de la ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional, a lo largo de estos días de diciembre, el número de muertos alcanza, por lo menos, a 37 personas, la amplia mayoría jóvenes, contándose los heridos en cientos y en más de 3.500 los detenidos.

der financiero. Así, en su corta gestión, el rumbo económico adoptado ha intentado privilegiar estos intereses (devaluación del peso, pesificación de las deudas bancarias al tipo de cambio de la convertibilidad, sanción de la ley de quiebras, etc.).

Por otro lado, nuevamente a expensas de anunciados salvatajes con recursos públicos, la gestión gubernamental ha evitado descargar el peso de estas medidas sobre los sectores financieros, dando continuidad así al esquema de transferencias de ingresos y riquezas que caracterizó la aplicación de las políticas neoliberales en las últimas décadas. Dicha continuidad vuelve a quedar de manifiesto en la confección del presupuesto fiscal de próxima aprobación para el año corriente que, bajo las recomendaciones del FMI, promete reeditar la política de ajuste del gasto público que caracterizó las gestiones políticas anteriores.

Frente a las demandas sociales expresadas en las calles, el nuevo gobierno ha implicado así una nueva frustración que se ha expresado en la prolongación de la dinámica social abierta en diciembre hasta la actualidad, aunque con menor intensidad.

De esta manera, las experiencias de los cacerolazos y movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires y el cordón urbano que la rodea han abierto, al interior de estos sectores, nuevos procesos de organización local de una enorme potencialidad y riqueza que, en menos de un mes, dieron nacimiento a asambleas populares en los diferentes barrios y a la conformación de la asamblea interbarrial que reúne semanalmente estas experiencias locales. En sus debates y sus continuas y múltiples protestas ha ido forjándose una programática popular que integra desde las reivindicaciones particulares o económicas generales (rechazo del pago de la deuda externa, entre otras) hasta la exigencia de una profunda reforma política orientada hacia formas de democracia participativa y/o directa, cristalizada en el reiterado estribillo de las protestas que reza “que se vayan todos”.

Por otra parte, a la par de estas experiencias, otras protestas vuelven a manifestarse,

particularmente protagonizadas por el movimiento de trabajadores desocupados y los trabajadores del sector público que ya habían encarnado el ciclo de movilizaciones durante agosto y septiembre de 2001. A lo largo del último mes, la articulación entre estos sectores sociales ha ido creciendo, lo que señala un proceso de construcción de solidaridades y nuevas territorialidades sociales.

La gestación de estas experiencias y su instalación en la calle dan cuenta tanto de la resistencia social desplegada frente a los intentos de descargar la salida de la crisis sobre las mayorías populares, como de la creciente aspiración de una renovación y democratización radical de la vida social. A diferencia de los sucesos de 1989, cuando la hiperinflación y los saqueos apresuraron la asunción de Carlos Menem a la presidencia, dando inicio a una profundización radical de las políticas neoliberales (luego sancionadas en la convertibilidad), la constitución de un nuevo modelo, sobre las cenizas de aquel régimen, enfrenta hoy tanto la dificultad de reconstruir la unidad de los poderes económicos -ahora bajo la aparente preeminencia de los “grupos exportadores”-, las limitaciones y urgencias de iniciar bajo este consenso un proceso que de tenga al menos el ciclo recesivo, así como la resistencia social a la afirmación de una salida que suponga, una vez más, una nueva profundización de la distribución regresiva del ingreso.

Este contexto visualiza la fragilidad que acompaña hoy a la salida adoptada por las élites políticas en enero reciente; asimismo, señala que la resolución definitiva de la crisis de hegemonía abierta en diciembre aún se halla pendiente. En tanto estos procesos están en curso, quizás valdría interrogarse sobre en qué medida, si la otrora “Argentina convertible” forjada por Menem y Cavallo fue presentada por los organismos internacionales de crédito como el exitoso camino a seguir, la Argentina de hoy no podría ser pensada como el espejo del futuro posible del neoliberalismo en América Latina.

Bibliografía

- AA.VV., 2000a, *Dossier “Bolivia. La ‘Guerra del Agua’ en Cochabamba”*, en *OSAL* No. 2, septiembre, CLACSO, Buenos Aires.
- AA.VV., 2000b, *Dossier “La revuelta indígena en Ecuador”*, en *OSAL* No. 1, junio, CLACSO, Buenos Aires.
- Basualdo, Eduardo, 2000, *Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década del noventa*, Univ. Nac. De Quilmes, FLACSO, IDEP, Buenos Aires.
- Basualdo, Eduardo, 2001, *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*, Univ. Nac. De Quilmes, FLACSO, IDEP, Buenos Aires.
- Boron, Atilio, 2000, *Tras el Búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- Chomsky, Noam, 2002, “El 11 de septiembre y sus consecuencias: ¿hacia dónde se dirige el mundo?”, en *OSAL* No. 6, enero, CLACSO, Buenos Aires.
- Dinerstein, 2001, “El poder de lo irrealizado. El *corte de ruta* en Argentina y el potencial subversivo de la mundialización”, en *OSAL* No. 5, septiembre, CLACSO, Buenos Aires.
- Íñigo Carrera y Cotarelo, 2001, “La protesta en Argentina (enero-abril de 2001)”, en *OSAL* No. 4, junio, CLACSO, Buenos Aires.
- Lozano, 2001, “Contexto económico y polí- tico de la protesta social en la Argentina contemporánea”, en *OSAL* No. 5, sep- tiembre, CLACSO, Buenos Aires.
- Rodríguez, 2001, “Un ‘Rosario’ de conflictos. La conflictividad social en clave local”, en *OSAL* No. 5, septiembre, CLACSO, Bue- nos Aires.
- Scribano y Schuster, 2001, “Protesta social en la Argentina de 2001: entre la normalidad y la ruptura”, en *OSAL* No. 5, septiembre, CLACSO, Buenos Aires.
- Seoane y Taddei, 2001, “Protesta social, ajuste y democracia: la encrucijada latinoame- ricana”, en *OSAL* No. 4, junio, CLACSO, Buenos Aires.
- Seoane, Taddei y Algranati, 2001, “Neoliberalismo, crisis y resistencias sociales en América Latina: las configuraciones de la protesta”, en *OSAL* No. 5, septiembre, CLACSO, Buenos Aires.
- Seoane, Viú, Rodríguez y Santucho, 2001, *Informe de Coyuntura*, Área de Investiga- ción, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, mimeo.
- Spaltenberg y Maceira, 2001, “Una aproxi- mación al movimiento de desocupados en el marco de las transformaciones de la cla- se obrera en Argentina”, en *OSAL* No. 5, sep- tiembre, CLACSO, Buenos Aires.
- Spaltenberg, Seoane, Rodríguez y Santucho, 2000, *Informe de Coyuntura octubre-diciem- bre*, Área de Investigación, Unión de Traba- jadores de Prensa de Buenos Aires, mimeo.